

REFLEXIONES SOBRE LA RECONFIGURACIÓN DEL MOVIMIENTO POPULAR ARGENTINO ANTE EL PROCESO DE RESTAURACIÓN DEL PROYECTO NEOLIBERAL

DOSSIER

ANDRÉS TZEIMAN - andrestzeiman@hotmail.com

Universidad de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Sociales. Instituto de Investigaciones Gino Germani – Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas

FECHA DE RECEPCIÓN: 6-5-19

FECHA DE ACEPTACIÓN: 6-9-19

Resumen

El presente artículo tiene como propósito realizar un ensayo de periodización de la reconfiguración del movimiento popular argentino ante el proceso de restauración del proyecto neoliberal iniciado el 10 de diciembre de 2015 con la llegada de Mauricio Macri a la Casa Rosada. Con ese objetivo, se presenta el concepto de ecuación social como forma de concebir el papel desempeñado por la institucionalidad sindical en dicho proceso de reconfiguración. A la vez, se plantea como elemento distintivo de la época la difracción existente entre la dimensión social de expresión del conflicto y la dimensión de representación política de la creciente disconformidad popular. A partir de esos conceptos, se desarrolla una descripción de los desplazamientos y oscilaciones que se producen en el movimiento popular en el contexto de diferentes temporalidades que van asumiendo la política y la economía, tomando como punto de partida para tal ejercicio un texto clásico del sociólogo chileno Manuel Antonio Garretón. Finalmente, se presentan algunas reflexiones finales e interrogantes sobre el porvenir del proceso social argentino.

Palabras clave: Argentina – Neoliberalismo – Macrismo - Movimiento popular

REFLECTIONS ON THE RECONFIGURATION OF ARGENTINE POPULAR MOVEMENT IN THE PROCESS OF RESTORING THE NEOLIBERAL PROJECT

Abstract

This article aims to conduct a periodization essay on the reconfiguration of the Argentine popular movement in the process of restoration of the neoliberal project, which has begun on December 10, 2015 with the arrival of Mauricio Macri at the government. With this purpose, the concept of social equation is presented as a way of conceiving the role played by the union institutionality in this

reconfiguration process. At the same time, the diffraction between the social dimension of conflict expression and the dimension of political representation of the growing popular discontent is raised as a distinctive element of the time. Based on these concepts, a description of the displacements and oscillations that take place in the popular movement is developed in the context of different temporalities that politics and economy assume, taking as a starting point for such exercise a classic text of the Chilean sociologist Manuel Antonio Garretón. As a conclusion, the article presents some final reflections and questions about the future of the Argentine social process.

Key Words: Argentina – Neoliberalism – Macrismo - Popular movement

I. Introducción

En un artículo publicado en el otoño del año 2003, dedicado a reflexionar en torno de la crisis argentina de diciembre del 2001, el sociólogo y ensayista Eduardo Grüner sostenía en aquel momento crítico, con un sesgo trágico, pero no sin cierto gesto de esperanza, que “las ‘masas’ muchas veces retroceden hacia el pasado, pero al chocarse con la pared de un presente que no cede, se ven obligadas a dar un salto hacia el futuro” (Grüner, 2003: 52).

Precisamente, oscilando entre, por un lado, una mirada retrospectiva que no puede dejar de situarse en el pasado (y rendir cuentas con él), y por el otro, ante la necesidad de imaginar el salto que permita avizorar la posibilidad de construcción de un futuro, este breve artículo se propone analizar el proceso de reconfiguración del movimiento popular argentino llevado a cabo desde la asunción de Mauricio Macri como presidente de la nación el 10 de diciembre de 2015.

Hablar (tal como pretendemos hacerlo en estas páginas) de una “reconfiguración del movimiento popular argentino” post 10 de diciembre de 2015 significa asumir como punto de partida que la derrota electoral del 22 de noviembre de ese año (entendida ante todo como una *derrota política*), al transformar las relaciones de fuerzas en la sociedad argentina, no podía dejar incólume a las fuerzas populares. Pues tal derrota supuso un verdadero traspie en términos de la batalla por la definición del paradigma societal dominante, que revestiría notables consecuencias prácticas en la distribución del poder en nuestra sociedad. En particular, nos referimos al viraje en el ejercicio de la dirección del Estado que,

ahora en manos de una alianza política con vínculos íntimos (cuando no instrumentales) con las clases dominantes, implica un fuerte retroceso para los sectores populares, modificando con ello de manera sustantiva el mapa del poder (en sus múltiples dimensiones) en Argentina.

Decíamos, entonces, que esa transformación en las relaciones de fuerzas, causada por la derrota política, plantea a las fuerzas populares el problema de su reconfiguración, pues: ¿sería posible afrontar la nueva etapa política adoptando la misma táctica y estrategia que en la etapa anterior? Según nuestro punto de vista, desde ya que no. Pero más allá de nuestra perspectiva al respecto (que, por supuesto, poco importa tratándose de esta materia), aquello que creemos resulta verdaderamente relevante son los movimientos de reconfiguración sucedidos en el movimiento popular argentino ante la inflexión política sucedida.

Siendo más concretos, sostenemos que con el triunfo del macrismo en 2015, el movimiento popular se ve obligado a modificar la estructuración de las alianzas y las contradicciones que habían predominado en su seno de forma inmediatamente anterior (es decir, aquellas que lo habían signado durante la etapa kirchnerista). En ese sentido, no pretendemos realizar aquí un balance de tal estructuración en aquel período (que, sin dudas, merecería mucha mayor extensión y atención que un artículo). Más bien, tratamos de señalar aquí como punto de partida de nuestro análisis que entre 2003 y 2015 la articulación del movimiento popular se había producido en función de un férreo liderazgo político (primero de Néstor Kirchner, luego de Cristina Fernández de Kirchner –de aquí en adelante, CFK–), el cual oficiaba de guía en el desarrollo del proceso social desde la dirección estatal. Pero dicho modo de estructuración del movimiento popular entró en conmoción con la llegada de Mauricio Macri a la Casa Rosada. Desde ya que durante la propia etapa kirchnerista, el entonces espacio político oficialista había sufrido resquebrajamientos en su interior (especialmente durante el segundo mandato de CFK, y ante todo en lo que respecta al mundo sindical). Pero, en cualquier caso, tales desgajamientos no alteraron el esquema en que se producía el ordenamiento general del movimiento popular: esencialmente bajo la matriz “kirchnerismo-antikirchnerismo”. Así, el kirchnerismo se constituyó, siguiendo a Martín Cortes

(2016), como una *heterogeneidad conducida* (es decir, una pluralidad de sectores heterogéneos unificados bajo la premisa de una conducción). Lo que intentamos señalar enfáticamente es que con la derrota política y la transformación producida en las relaciones de fuerzas luego de diciembre del 2015, se plantea una nueva *coyuntura*¹, que interpela a las fuerzas populares para reexaminar y reevaluar sus alianzas, sus tácticas y estrategias.

Ahora bien, el análisis de tal proceso de reconfiguración guarda, como venimos sosteniendo, su relación con el pasado inmediato (es decir, con la etapa kirchnerista). Pero también debe ser pensado en su vínculo con dos aspectos que consideramos esenciales para comprender el devenir del movimiento popular.

El primero de ellos tiene que ver con el sentido histórico del proyecto de la derecha argentina que llegó por primera vez a la Casa Rosada a través de la vía electoral. Nos referimos a una vocación *refundacional* por parte de esta derecha, que bajo el lema del “cambio cultural”, arriba al poder gubernamental con el propósito de producir una fuerte reestructuración de las relaciones entre Estado y Sociedad (Tzeiman, 2017). Ello implica una proyección estratégica, que no sólo se limita a acabar con el afán democratizador del proceso político precedente, sino que también busca transformar el funcionamiento de la sociedad argentina, proponiéndose con ese fin tanto la desarticulación de las mediaciones organizativas que habían permitido la penetración de los sectores populares en el Estado, como, a su vez, dejar a las mayorías sociales a merced de las disposiciones del mercado (entendiendo a éste último como garante del “buen gobierno”). La reconfiguración del movimiento popular se produce entonces de forma relacional con los intentos de avance de dicho proyecto estratégico refundacional por parte de la derecha.

En cuanto al segundo aspecto, consideramos que no es posible comprender el proceso de rearticulación del movimiento popular como un mero

¹ Entendemos el concepto de *coyuntura*, siguiendo a Nikos Poulantzas (1974), como “la situación política en el momento actual”, es decir, como “el punto estratégico en que se fusionan las diversas contradicciones en cuanto reflejan la articulación que especifica una estructura con predominio” (P. 39).

reacomodamiento restringido a desplazamientos propios de la esfera política. Es menester inscribir tales desplazamientos en el contexto de un conjunto de contradicciones sociales que se producen al calor de la implementación de un modelo económico, y que, según sus avances, retrocesos y saltos cualitativos, va asumiendo diferentes *temporalidades*. En tal sentido, el vínculo entre economía y política establece distintos *ritmos* según la etapa del proceso al que nos estemos refiriendo (Portantiero, 1982). La aceleración de las contradicciones como producto de la profundización del modelo económico, tiene desde luego consecuencias de envergadura sobre los límites en las formas de articulación política. Ello, por supuesto, no significa establecer un horizonte de determinación de la política por la economía. Implica, más bien, señalar que las reconfiguraciones políticas están signadas por la *temporalidad* que caracteriza al proceso económico. Con esto no pretendemos señalar, desde ya, que las transformaciones económicas establecen consecuencias *necesarias* en el campo político. Es decir, no creemos que exista una correspondencia *obligada* o *lógica* entre ambos terrenos (lo cual redundaría en una lectura “economicista”). Más bien afirmamos que aun cuando los condicionamientos económicos no *determinan* el despliegue de ciertas mediaciones políticas e ideológicas, sí las habilitan en forma amplificada, mientras que en contextos de regularidad del funcionamiento económico, tienden a mostrarse menos disponibles. A su vez, sostenemos también la pertinencia de ponderar el sentido inverso de los condicionamientos. Esto es, el modo en que la política establece límites a la economía. Pero, en cualquier caso, en tanto aquí centraremos el análisis en la dimensión de lo político, ello para nosotros va de suyo².

² Este aspecto será brevemente señalado más adelante en el artículo, pero adelantamos aquí lo siguiente: la decisión del gobierno de adoptar en los primeros dos años de mandato un enfoque que sus referentes denominaron “gradualista”, manifiesta que las relaciones de fuerzas en lo político establecieron límites decididos al despliegue del programa económico. Precisamente, este artículo abordará algunas de las expresiones en materia de articulación popular que oficiaron de límite para que el gobierno se incline en sus inicios hacia un modelo “gradual”, en lugar de volcarse inmediatamente hacia la opción del “shock”. En cualquier caso, la existencia de esa disyuntiva en el gobierno nos interesa con el afán de señalar que, por esa razón, el dominio específicamente político de la vida social guarda una importancia vital. Y como tal, no puede ser comprendido tan solo como “expresión” necesaria o lógicamente posterior de lo que sucede en el dominio económico.

Considerando lo dicho en los párrafos precedentes, el presente artículo contará con tres apartados y uno más (el último) dedicado a concluir con unas palabras finales. En el primero de ellos aludiremos a la relación Estado-Sociedad Civil en Argentina. En el segundo, recuperaremos un esquema de periodización realizado en 1982 por el sociólogo chileno Manuel Antonio Garretón que, según nuestra perspectiva, guarda hoy enorme vigencia. En el tercero, ensayaremos una breve periodización del proceso de reconfiguración (que aún se encuentra en curso). Y finalmente, culminaremos el artículo con algunas palabras finales a modo de conclusión.

II. La ecuación Estado-Sociedad Civil en Argentina: la centralidad del “factor sindical”.

Creemos pertinente entonces comenzar el recorrido de este artículo haciendo referencia a un problema largamente discutido en el orden de la teoría, especialmente en la tradición marxista (desde el propio Marx en sus escritos juveniles, y con un énfasis particular en la obra del dirigente comunista italiano Antonio Gramsci): hablamos de la relación entre Estado y Sociedad Civil en las sociedades capitalistas.

Quien justamente siguiendo el linaje Marx-Gramsci dedicara interesantes aportes a propósito de dicha cuestión, que pueden resultarnos de suma utilidad para el abordaje de los problemas que aquí nos conciernen, fue el intelectual boliviano René Zavaleta Mercado. En un artículo titulado *El Estado en América Latina*, Zavaleta acuñó la categoría de *ecuación social*, precisamente para conceptualizar el vínculo entre Estado y Sociedad Civil. Sostenía allí Zavaleta:

La manera abigarrada que tienen las cosas al entrelazarse propone por sí misma el concepto de ecuación social o sistema político, que es una de las acepciones que daba Gramsci al bloque histórico: el grado en que la sociedad existe hacia el Estado y lo inverso, pero también las formas de su separación o extrañamiento. El análisis mismo del Estado como aparato y como ultimidad clasista sugiere la forma de su relación con la sociedad civil. Por razones propias de cada caso, hay ecuaciones en las que la sociedad es más robusta y activa que el Estado, ecuaciones donde el Estado parece preexistir y dominar sobre la sociedad, al

menos durante períodos determinados y sistemas donde hay una relación de conformidad o ajuste. Esa relación supone un movimiento y por eso es tan absurdo hacer clasificaciones finales sobre ello. La cualidad estatal, no estatal o intermedia de una instancia depende de su momento (Zavaleta, 1990: 177).

Aquí Zavaleta nos deja planteados varios elementos importantes para nuestro razonamiento sobre la coyuntura argentina. En primer lugar, nos está señalando que si bien en las sociedades capitalistas existe una indicación que marca el componente estructural de la relación entre Estado y Sociedad Civil (según el cual el Estado resulta un elemento co-constitutivo, o el aspecto específicamente político, de la dominación capitalista), al mismo tiempo ello no implica que aquella relación se replique del mismo modo en cada caso nacional. Es decir, que según la historia de cada nación, su desarrollo capitalista, su inserción en el mercado mundial y la forma y las mediaciones institucionales que constituyeron a sus clases fundamentales, la relación Estado-Sociedad Civil sufre notables variaciones. En algunos casos se forjan sociedades civiles más robustas, mientras que en otros precisamente la debilidad de las sociedades da lugar a Estados más oficiosos (vale recordar al respecto la proposición clásica de Gramsci en sus cuadernos carcelarios: “En Oriente el estado era todo, la sociedad civil era primitiva y gelatinosa; en Occidente, entre estado y sociedad civil existía una justa relación y bajo el temblor del Estado se evidenciaba una robusta estructura de la sociedad civil”) (Gramsci, 2007: 340).

108

Pero en segundo lugar, en la relación Estado-Sociedad Civil, Zavaleta otorga un papel fundamental a lo que él denomina *mediaciones sociales*, definidas como “enclaves o fortines del Estado en la sociedad y de la sociedad en el Estado” (Zavaleta, 2008: 41). Esto es: aquellas instancias sociales que permiten “conectar” al Estado y la Sociedad Civil y “soldar” así el vínculo entre ambas. Mas el argumento de Zavaleta no termina allí. Pues afirma, como vimos en la cita aquí arriba, que la cualidad de tales mediaciones “depende de su momento”, es decir, utilizando sus propias palabras, que “su contenido es aleatorio o mutante” (Zavaleta, 1990: 177). De esa forma, nos habla de la variabilidad histórica en el

papel que desempeñan las mediaciones en el establecimiento de la relación Estado-Sociedad Civil (aun en una misma nación).

El breve rodeo introductorio realizado en los párrafos anteriores de este apartado nos permite, desde nuestro punto de vista, pensar en perspectiva histórica el rol de los sindicatos en la estructura social argentina. Entendemos que el sindicalismo (y en especial aquel que goza del reconocimiento por parte de la institucionalidad estatal), desempeña de forma posterior a 1945 (o sea, desde la emergencia del peronismo), la función de “nexo” entre Estado y Sociedad Civil. De ese modo, se convierte a partir de allí en una institucionalidad sistémica³ que, como tal, tiende al centro político según las oscilaciones de cada coyuntura (es decir, de acuerdo con las variaciones en las relaciones de fuerzas). Tal es la razón por la cual en los períodos de mayor algidez del conflicto social en nuestra nación se han producido diversas fracturas al interior del universo sindical, presentándose de modo recurrente el fenómeno de creación de centrales paralelas. Ello se debe, creemos, a que en tanto en la constitución de Argentina como *sociedad de masas* los sindicatos se erigieron como mediaciones fundamentales en la *integración sistémica* de los sectores populares (permitiendo “ensamblar” Estado y Sociedad Civil), las transformaciones en las relaciones de fuerzas provocaron en todos los casos modificaciones, desplazamientos u oscilaciones en la institucionalidad sindical y su vínculo con el Estado. Estas mutaciones fueron registradas con mucho tino por René Zavaleta, quien adoptando una perspectiva latinoamericana al respecto, observaba:

En el estatuto actual, el sindicato en México, por ejemplo, es una mediación característica, un filtro entre la sociedad y el Estado. Ocurría algo semejante con

³ Esa constitución como *institucionalidad sistémica* está íntimamente vinculada en Argentina con la relación que los sindicatos oficialmente reconocidos por el Estado establecen con dicho Estado. Tal como señala con suma vigencia Juan Carlos Portantiero (1973) en su texto clásico, titulado *Clases dominantes y crisis política en la Argentina actual*, las actitudes de la burocracia sindical en nuestro país están *determinadas* por la relación de dependencia que guardan con respecto al Estado, cualquiera sea el bloque de fuerzas que lo controle. En ese sentido, afirmaba allí Portantiero: “El peso del Estado sobre la Burocracia Sindical es enorme y las armas legales para controlar sus pasos abarcan todos los grados: desde la intervención lisa y llana por funcionarios gubernamentales hasta el ahogo económico por el bloqueo de sus fondos” (Portantiero, 1973: 102).

los sindicatos en tiempos de Perón, en la Argentina. Si se tomara esta situación haciendo un corte estático, debería concluirse, como quería Althusser: demasiado cooptados, leales y sumergidos en el sentido del Estado, serían en la práctica verdaderos *aparatos ideológicos del Estado* (y también políticos). Por su función, devienen en efecto brazos del Estado y sus dirigentes en funcionarios de éste. Pero eso no ocurre de la misma manera en Bolivia donde los sindicatos han existido siempre *contra* el Estado, ni ocurre desde luego con los sindicatos argentinos después de Perón (Zavaleta, 1990: 177; énfasis del original).

Esto significa que a la institucionalidad sindical no le “corresponde” un papel en abstracto, sino que está supeditada a la variabilidad histórica y nacional de las mediaciones, a la cual antes hicimos referencia. Mas la comprensión de dichas variaciones debe estar inscrita en una historia nacional donde tal mediación se ha erigido en un componente estructural del vínculo entre Estado y Sociedad Civil. Por eso, considerando el carácter fundamental de las instituciones sindicales en tanto mediaciones sociales en la Argentina post-1945, creemos que la conflictividad desatada al interior del universo sindical en el marco de las relaciones de fuerzas que el macrismo *hereda* del kirchnerismo, adquiere una notable centralidad para pensar los reacomodamientos producidos en el movimiento popular argentino a partir de diciembre del 2015.

A la posición estructural de la institucionalidad sindical en la *ecuación social* argentina, debemos adicionar otro elemento que otorga nuevas tonalidades a los reacomodamientos sucedidos en el mundo sindical. Nos referimos a la emergencia reciente de una expresión organizativa de carácter orgánico por parte de los trabajadores “informales” o “excluidos”, en el marco de la composición de la clase trabajadora que actualmente existe en nuestro país. Si en los años sesenta la sociología latinoamericana pensaba esa dimensión de análisis bajo la categoría de “marginalidad”; si en los años noventa fueron creados los movimientos de trabajadores desocupados al calor de la crisis del modelo neoliberal; hoy podemos observar que dicho sector social erige de forma cada vez más consolidada (aunque no sin dificultades y disyuntivas) sus mediaciones organizativas. Las cuales han desplegado reclamos y reivindicaciones no sólo hacia la esfera estatal, sino también hacia el propio universo sindical, constituyendo a la vez sus propios

liderazgos sociales y políticos. Así, la mencionada posición estructural de los sindicatos en la *ecuación social* de nuestra nación (con los imaginarios e identidades que ello trae aparejado), provoca una identificación con lo sindical y una interpelación hacia las instituciones sindicales por parte del sector de trabajadores que representa el polo “excluido” en la economía argentina.

Finalmente, entonces, el punto al que hemos querido llegar con los razonamientos desarrollados en este apartado, es que la centralidad de la institucionalidad sindical en el proceso político contemporáneo, y los modos en que se han producido las modificaciones, desplazamientos u oscilaciones en el universo sindical, no se deben exclusivamente al poder de tal o cual figura, ni tampoco se explican únicamente por la (escasa) voluntad de radicalización de un liderazgo (o de varios de ellos) ante el avance del modelo económico. Más bien, entenderemos aquí el poder de los sindicalistas y sus voluntades como factores sustantivos, desde ya, pero que deben ser entendidos en el marco de una estructura social, donde la institucionalidad sindical en tanto mediación social, funciona como “nexo” entre Estado y Sociedad Civil, anteponiendo por lo tanto ciertos límites a virajes contundentes, que solo tienden a producirse en contextos donde ocurren conmociones sociales de importante magnitud.

111

III. Un esquema de periodización vigente

Entonces, para avanzar en el próximo apartado hacia el ejercicio de periodización prometido, nos serviremos de una propuesta realizada por el sociólogo chileno Manuel Antonio Garretón (1982), en la cual éste analiza la trayectoria, a la vez que presenta un balance, de las dictaduras militares de fines de los años setenta en el Cono Sur de América Latina. Utilizando tal propuesta de Garretón sobre las dictaduras no pretendemos homologar la experiencia de aquellos gobiernos de facto con el proceso político contemporáneo en Argentina (no comprender tal diferencia no sólo resultaría un severo error analítico y político, sino que también implicaría no poder observar la abismal diferencia entre la vida y la muerte que ha significado –y aún significa- la distancia entre ambos regímenes políticos). Pero pese a esas abismales diferencias, creemos que existen notorias similitudes entre

el plan económico y el paradigma societal que intenta implementar e impulsar el gobierno de Cambiemos y aquel que fuera llevado a cabo por la última dictadura militar en nuestro país, especialmente durante el período en que José Alfredo Martínez de Hoz se desempeñó al frente del Ministerio de Hacienda de la Nación (Tzeiman, 2017). En ese sentido, sostenemos que más allá de las notorias diferencias que existen en materia de régimen político entre ambos procesos, la semejanza tanto en el carácter del modelo económico como en sus objetivos (parciales y estratégicos), junto con la pertenencia a una misma tradición de subjetivación política en el proyecto de las derechas, nos permiten servirnos de aquel análisis de Garretón para ensayar nuestra periodización sobre la reconfiguración del movimiento popular durante el macrismo.

Vale aclarar que adoptar como guía ese esquema del mencionado autor chileno no supone reducir o deponer la enorme riqueza de la movilización social y política desplegada durante el gobierno de Mauricio Macri a una explicación que anule esa multiplicidad y heterogeneidad de manifestaciones. Implica más bien usar esa orientación para comprender los ciclos de movilización popular en el marco de un proyecto estratégico de refundación social (pues un análisis en Argentina de cada sujeto social o de cada central sindical, aún limitándonos al período 2015-2019, implicaría un estudio que excedería en mucho los límites de este trabajo).

Así, introduciéndonos ya en la periodización de Garretón, éste sostiene que deben distinguirse cuatro fases en la trayectoria de las dictaduras.

Una primera fase la denomina de carácter “reactivo” o “defensivo”. Tal fase, en palabras del propio Garretón “busca desarticular la sociedad precedente, especialmente la matriz de constitución de los sujetos socio-políticos” (Garretón, 1982: 12). Esta etapa tendría entonces un signo esencialmente negativo, vinculado a una reacción frente al proceso político inmediatamente anterior. Es por ello que, según Garretón, la *venganza* se convierte en esta fase en el clima de época, tratando de dar por tierra con el enemigo en relación con el cual se produce el viraje político.

Pero a esta primera fase “reactiva” le sobreviene una segunda, de carácter “transformadora” o “fundacional”, tal como la llama el autor en cuestión. La problemática básica en esta segunda etapa se basa en “la definición de un modelo de desarrollo, de un nuevo sistema de relaciones sociales en las diversas esferas de la sociedad” (Garretón, 1982: 18). Es decir, que mientras la primera fase resultaba de un signo esencialmente reactivo o negativo (siempre en contrapunto con el proceso político inmediatamente anterior), esta segunda se fundamenta en la proposición y el desarrollo del modelo de sociedad añorado por el nuevo gobierno, o sea, asume un carácter más bien positivo y de corte estratégico.

No obstante, según observa Garretón, esta segunda fase acaba por resultar una mera expresión de deseo, pues termina convirtiéndose en un rotundo fracaso. Dicho fracaso se produce especialmente en la base económica de la sociedad. Repasemos las palabras del sociólogo chileno acerca del fracaso de la etapa “fundacional” para ver si detectamos cierto aire de familia con el proceso argentino contemporáneo (recordemos que Garretón escribe en 1982 el texto que citaremos a continuación):

El dogmatismo e incompetencia de los equipos tecnocráticos, la ausencia de un proyecto con solidez en el plano de la inversión, la extrema dependencia del capital financiero externo en un momento de liquidez que tiende a agotarse, el carácter especulativo y depredador de los grandes grupos económicos formados bajo el amparo de políticas estatales, por citar algunos factores del ámbito económico, unidos a la débil capacidad de incorporación y cooptación de la sociedad civil, dejan al régimen sin un proyecto u oferta social (Garretón, 1982: 20).

Cualquier semejanza con la actualidad... no es pura coincidencia. Se trata, una vez más, de la debilidad hegemónica y el carácter dependiente de las clases dominantes locales en América Latina.

En cualquier caso, y para no desplazarnos del recorrido que estamos realizando por la periodización de Garretón, este fracaso en la etapa “fundacional” que es producto del incumplimiento de las promesas económicas del nuevo modelo societal, abre lugar a una tercera fase del proceso. Esta tercera fase es denominada

de “administración de crisis recurrentes” y está precisamente marcada por el fracaso de la etapa “fundacional”. Según el autor: “cómo ‘apagar incendios’ aquí y allá y asegurar la mantención o sobrevivencia del régimen, más allá de cualquier proyecto de transformación es la problemática central para aquel en esta fase” (Garretón, 1982: 20). Pero aquí realiza una advertencia: la existencia de crisis recurrentes no significa que el proceso esté completamente acabado. En ese sentido, sostiene: “La pérdida de la dimensión fundacional no significa necesariamente que el régimen pase automáticamente a una fase terminal. Este puede transitar de crisis en crisis por un tiempo prolongado” (Garretón, 1982: 22).

Luego, una cuarta y última fase, tal como la presenta Garretón, es la llamada “terminal”. De acuerdo con el sociólogo chileno aquí “la problemática básica ya no es ni la transformación de la sociedad, ni la pura mantención del régimen, sino las condiciones de salida de los actores predominantes de éste (algo así, como el ‘salvataje de muebles’ del incendio) y los elementos básicos del régimen de reemplazo” (Garretón, 1982: 23). Tal como se puede percibir en la lectura de la cita anterior, la definición de dicha fase se relaciona íntimamente con el régimen militar, en tanto se vincula con la negociación acerca de la “salida”, o más bien, la “transición” hacia un régimen político democrático, no dictatorial, y las condiciones en que ese proceso es abordado por las Fuerzas Armadas. De cualquier modo, resulta interesante la aseveración de Garretón según la cual en esta fase se presenta como un aspecto decisivo el paso a la oposición de sectores que habían apoyado anteriormente al régimen. Es decir, se trata de un momento de crisis de legitimidad, donde se dispersan por completo los respaldos que había logrado conquistar el régimen desde la posición de poder que ostentaba en las circunstancias en que se encontraba en sus inicios, al llegar a la dirección del Estado.

Restan realizar dos aclaraciones acerca de esta periodización de Garretón. La primera de ellas es que, según advierte el propio autor, estas fases no deben ser leídas de un modo estático. Esto es, no constituyen compartimentos estancos. Por lo tanto, a modo de ejemplo, hay elementos de la primera fase que se sostienen en la segunda, así como lo mismo ocurre viceversa. O sea, no todo sucede de manera

ordenada y cronológica, tal como podría inferirse de la sucesión de etapas. La segunda aclaración remite a cierta relación entre cada una de las fases y un modo de ejercicio de la oposición social y política (lo cual, reiteramos, no significa pensar ese vínculo en clave de *necesariedad*). En ese sentido, cuando hagamos a continuación nuestra propia periodización del proceso argentino contemporáneo, también retomaremos las reflexiones de Garretón sobre las resistencias sociales y políticas frente al avance de la derecha.

IV. Ensayo de una periodización de la reconfiguración del movimiento popular argentino en el macrismo (diciembre 2015-enero 2019)

Partiendo de lo desarrollado en los apartados anteriores, nos proponemos en las siguientes páginas avanzar en un ensayo de periodización de las etapas que ha transitado el movimiento popular argentino en su proceso de reconfiguración a partir del 10 de diciembre de 2015 hasta el comienzo de 2019, año de elecciones presidenciales. Para ello, recapitulemos algunos elementos que hemos señalado hasta aquí (o que se desprenden de lo hasta ahora señalado), y que son el punto de partida de la periodización que presentaremos a continuación: A) La *heterogeneidad conducida* que constituía el espacio kirchnerista con anterioridad a diciembre de 2015 pasa a sufrir un conjunto de resquebrajamiento como bloque político, al tiempo que se reestructuran las contradicciones sociales al calor del intento de aplicación del nuevo paradigma societal; B) La institucionalidad sindical desempeña un papel central en la reconfiguración del movimiento popular, en tanto resulta una *mediación social* fundamental en la *ecuación social* argentina, empalmando además con el carácter estructural que asume el sector de los trabajadores informales en el momento actual del capitalismo argentino; C) La “unidad en la acción”, propia del campo reivindicativo, presenta altibajos durante el macrismo, logrando picos de gran amplitud y heterogeneidad en la movilización de masas, los cuales no se traducen de forma contundente en el plano político-institucional (exceptuando algunas manifestaciones en el terreno parlamentario); y D) Esa intraducibilidad es fundamentalmente un producto del perfil político-ideológico de carácter corporativo de un sector peronista del sindicalismo y del sistema político, que tiende al centro político y vela por mantener el conflicto social en sus canales estrictamente institucionales, aun bajo la presión “desde abajo” de la persistente movilización social.

Pues bien, ahora sí, podemos ingresar en el ensayo de periodización del proceso de reconfiguración del movimiento popular argentino posterior al 10 de diciembre de 2015.

Como decíamos en el apartado anterior junto a Garretón, la primera fase, que hemos denominado “reactiva”, tiene como objetivo principal el combate contra el modelo precedente. En el proceso contemporáneo, claro está, esa batalla se libra contra el kirchnerismo, o bien, el “populismo”, tal como gustan llamarlo los intelectuales orgánicos de la derecha y las principales espadas políticas del oficialismo. En esta primera etapa, entonces, el gobierno entrante procede a lo que, siguiendo un escrito del politólogo argentino Guillermo O’Donnell (2000), podemos llamar la “implantación del orden” y la “normalización de la economía”. Esto significa que para llevar adelante la salida de la matriz heterodoxa en materia económica empleada por el gobierno anterior, y para acabar con el vínculo que las masas (y sus mediaciones organizativas) habían establecido con la esfera estatal, el gobierno de Cambiemos despliega una intensa campaña de desprestigio y deslegitimación pública contra la gestión anterior y sus principales referentes políticos (en particular, desde ya, contra CFK, aunque también vale destacar la prisión sin proceso judicial previo a la dirigente social Milagro Sala). Esta primera etapa “reactiva” la podemos ubicar, a grandes rasgos, en el primer año y medio de gobierno de Mauricio Macri. Y ella alcanza un estadio de agudización de las contradicciones sociales tras el avance en materia de políticas económicas (principalmente, la redistribución regresiva del ingreso) conseguido a lo largo de 2016⁴.

116

Entonces, frente a este proceso descrito en el párrafo anterior, en el seno del movimiento popular se produce una primera rearticulación: se trata de un *reagrupamiento por abajo*. Ello sucede al calor de las políticas de redistribución regresiva del ingreso llevadas a cabo a lo largo de todo el año 2016, que fueron denominadas por los referentes del oficialismo como “normalización económica” (hablamos de: devaluación, aumentos de las tarifas en los servicios públicos, eliminación o baja de las retenciones a los productos agropecuarios, despidos en el sector público, liberalización cambiaria, etc.). La resistencia a esas políticas “normalizadoras” exige el proceso de reacomodamientos señalado, con el fin de reunir

⁴ Tal como ha sido señalado más arriba, ello no significa que el proceso de denostación pública y de demonización del kirchnerismo, y en particular de CFK, se termine luego del primer año y medio de gobierno. Ello continuará en el resto del mandato de Mauricio Macri, de un modo permanente, más aún con la persistencia de la polarización política. Pero la dedicación casi exclusiva de la agenda política, pública y mediática a la impugnación del kirchnerismo, remite especialmente a la primera fase del gobierno de Cambiemos. A medida que avanza el tiempo, tal denostación deberá convivir primero con la agenda “fundacional” del gobierno, y luego con el advenimiento de la crisis económica.

mayores fuerzas para frenar el embate de este primer momento disciplinador. Así, este reagrupamiento por abajo se manifiesta en un conjunto de acciones donde, como anticipáramos más arriba, se comienzan a relajar las líneas demarcatorias que habían signado los aglutinamientos reivindicativos durante el gobierno anterior.

Un primer signo de ello aparece en la masiva concentración convocada frente al Monumento al Trabajo el día 29 de abril de 2016. Allí participaron ambos sectores tanto de la Central de Trabajadores de Argentina (CTA) como de la Confederación General de Trabajo (CGT, por aquel entonces dividida, pues su reunificación se concretaría recién el 22 de agosto de 2016 con la conformación de un triunvirato de conducción –convertido en binomio a fines de 2018). A dicha concentración le siguió la presentación y aprobación parlamentaria en ambas cámaras legislativas de un proyecto de ley para el freno de los despidos, que sería vetada de forma inmediata por el presidente Macri. Más allá del avance que significó esta unidad, primero en la calle, y luego en su expresión parlamentaria, ella no redundaría en un curso de acción conjunta en lo que restaría del 2016.

No obstante, en el marco de estos reagrupamientos por abajo, es en la segunda mitad de 2016 cuando se llevarían a cabo un conjunto de acciones de peso. El día 7 de agosto se produciría una multitudinaria manifestación de los movimientos sociales que aglutinan a los trabajadores informales, o como se autodenominan tales organizaciones, a los trabajadores de la economía popular. Esta articulación posee dos características distintivas (entre otras que podrían señalarse). Una de ellas es que está integrada tanto por organizaciones que fueron parte del espacio político del kichnerismo como por otras que no lo fueron. Y la segunda es la estrecha relación establecida por estos movimientos con la institucionalidad de la Iglesia Católica (pues estas organizaciones se han referenciado públicamente en la prédica de la máxima autoridad del Vaticano, el Papa Francisco). Mientras tanto, el 2 de septiembre confluían en la Plaza de Mayo las distintas columnas provenientes de todo el país que articularon la masiva Marcha Federal convocada por las dos vertientes de la CTA. En este caso, al igual que con los movimientos sociales, también vale señalar que dichas centrales habían estado divididas como producto de su posicionamiento divergente frente al kirchnerismo. Finalmente, el 2016 concluiría con una serie de movilizaciones convocadas por los movimientos sociales en reclamo de una ley de emergencia social. Movilizaciones entre las cuales sobresalió una de ellas, organizada junto a la entonces ya reunificada CGT, que se llevara adelante el 18 de noviembre en las puertas del Congreso de la Nación.

Pero el clímax de este reagrupamiento por abajo ante el proceso de degradación de los salarios, de despidos y de redistribución regresiva del ingreso, tuvo su máxima expresión en una movilización convocada por la CGT el día 7 de marzo de 2017, a la que asistirían tanto las dos CTA como los movimientos sociales, frente al Ministerio de Producción de la Nación⁵. Esta última concentración, que terminó en escándalo ante el aplazamiento de la convocatoria a un paro general por parte de la central obrera, demostró tanto los límites de la “unidad en la acción” como las fracturas internas en el sindicalismo. En particular, se reflejaron las divisiones existentes en la propia CGT, al predominar en su seno la inclinación al diálogo con el gobierno y el mantenimiento del conflicto en los canales estrictamente institucionales (aún bajo la presión de las propias bases de la CGT y del conjunto de las otras centrales de trabajadores). En ese sentido, el tardío paro general llamado por la CGT para el día 6 de abril de 2017 fue tan solo un bálsamo para aplacar las exigencias que pesaban sobre sus dirigentes, quienes manteniéndose en esta tónica, en los meses siguientes no profundizaron la medida.

Antes de pasar a la segunda fase que hemos presentado junto a Garretón (es decir, a la “fundacional”), vale recordar un mojón de esta primera, que marca el carácter de *revancha* señalado en la definición de la fase “reactiva”. Dijimos que en aquella fase predomina la desarticulación del modelo societal propio del proceso político inmediatamente anterior. Pues bien, el 3 de mayo de 2017 la Corte Suprema de Justicia de la Nación (en su nueva composición, es decir, ya integrada con dos de los cinco jueces nombrados –con acuerdo parlamentario- por el presidente Macri) emitió un fallo que declaraba aplicable el beneficio conocido como “2x1” (indicado en la Ley 24.390) para las penas de prisión por delitos de lesa humanidad. Se trataba, por lo tanto, de un dictamen que permitía reducir las penas de forma significativa para quienes cometieron crímenes de ese tipo. Este hecho da cuenta de que la fase “reactiva”, desde la perspectiva del gobierno de Cambiemos, debe resultar aleccionadora, incluso en la transformación radical de la narración histórica producida por el gobierno precedente. No obstante, frente a dicho fallo de los jueces supremos, también se produce el fenómeno de reagrupamiento por abajo. El movimiento

⁵ Vale recordar que el día anterior a esa movilización, el 6 de marzo de 2017, se produjo una manifestación masiva de los sindicatos docentes frente al Congreso de la Nación ante la suspensión de facto de la paritaria nacional docente por parte del gobierno nacional. Esa movilización impulsada por la unidad de los gremios nacionales del sector, que resultaron verdaderos dinamizadores del conflicto sindical durante el macrismo, contó además con la presencia de dirigentes del triunvirato de conducción de la CGT, abonando este proceso de reagrupamiento por abajo al que hacemos referencia.

de derechos humanos (superando las divisiones existentes en su seno), a través de la realización de una movilización unificada y de enormes dimensiones, consiguió que las dos cámaras del Congreso convirtieran en ley una norma que prohibía la aplicación de la ley del “2x1” a los condenados por delitos de genocidio, lesa humanidad y crímenes de guerra.

La movilización recién mencionada, convocada por los organismos de derechos humanos el día 10 de mayo de 2017, marcaría un cierto *impasse* en el proceso de movilización social, en tanto a partir de allí la discusión pública pasaría a concentrarse centralmente en el proceso electoral, de cara a los comicios de medio término de agosto (primarios) y octubre (definitivos). Sin embargo, en pleno proceso electoral, el campo de los derechos humanos protagonizaría un nuevo conjunto de protestas, cuyo punto más álgido ocurriría en la masiva concentración llevada a cabo en Plaza de Mayo el día 1 de septiembre de 2017. Tal acción de protesta se realizó a un mes de la desaparición de Santiago Maldonado, un joven que antes de ser encontrado sin vida, estuvo 79 días desaparecido, luego de que la gendarmería irrumpiera de forma violenta en una comunidad mapuche de la provincia de Chubut con la que Maldonado se estaba solidarizando.

Consideramos de suma relevancia destacar aquí tanto la movilización en contra del “2x1” como aquella que se produjo en reclamo por la aparición de Santiago Maldonado. Pues cuando hablamos de la transformación del paradigma societal que emprende Cambiemos, ello no se estanca en el viraje del modelo económico. Más bien, como señalamos más arriba, implica mutaciones en todos los órdenes de la vida social. Y uno de ellos, y no es casual que fuera especialmente virulento en la fase que hemos llamado “reactiva”, se despliega en el campo de los derechos humanos. Es decir, en un puntal de la política del gobierno anterior a partir del cual éste había articulado buena parte de su propuesta en materia de narrativa histórica. No es llamativo que, en la medida en que tal reescritura de la historia nacional había adoptado niveles elevados de radicalidad en el kirchnerismo (llegando al final del segundo mandato de CFK a plantear el avance judicial sobre los responsables civiles de la última dictadura), el gobierno de Cambiemos intentara por medio de varios mecanismos retornar “a foja cero” en esta materia. Y tampoco resulta casual que, frente a esto último, también en este terreno se produzca un reagrupamiento por abajo en pos de un ejercicio efectivo de la resistencia.

Pero más allá de la trascendencia de las manifestaciones mencionadas en el párrafo anterior, el ciclo de movilizaciones de masas se reanudaría con mucho vigor a fines del 2017, de forma posterior a las elecciones legislativas del mes de octubre. En este caso, la

reanudación de las movilizaciones de masas se hallaría íntimamente vinculada con el paso a la segunda fase en el proceso político, aquella que denominaremos, siguiendo a Garretón, como etapa “fundacional”. Ubicamos el comienzo de esta segunda fase en el período que se inicia de forma posterior al triunfo del gobierno en las elecciones legislativas del 22 de octubre de 2017 (especialmente por la victoria en la Provincia de Buenos Aires sobre la candidatura de CFK, pero también a nivel nacional, donde Cambiemos se impuso en 13 de los 24 distritos electorales del país).

Recapitulemos: el día 30 de octubre de 2017, es decir, apenas ocho días después del triunfo electoral, Mauricio Macri convoca en el Centro Cultural Kirchner a gobernadores, jueces, sindicalistas, funcionarios y legisladores, y anuncia su vocación de dar inicio a un proceso de “reformismo permanente”. Más allá de las declaraciones emitidas aquel día por el presidente, el comienzo de la nueva fase se cristaliza en el envío de tres proyectos de reformas al Congreso de la Nación: reforma fiscal, reforma previsional y reforma laboral. Se trata esta vez de avanzar con mayor profundidad en la constitución del nuevo paradigma societal con el que sueña Cambiemos: achicamiento del gasto del Estado, desarticulación del sistema previsional hacia un modelo de capitalización individual y flexibilización de las relaciones laborales.

El grado de profundidad de las reformas planteadas por el gobierno en esta segunda fase abre, según nuestro punto de vista, una nueva etapa también en el proceso de resistencias. Ya consolidado el reagrupamiento por abajo, comienza ahora el proceso de contestación frente a la fase “fundacional”. Tal como señala Garretón: “La problemática central para la oposición en esta fase es cómo impedir que se consoliden transformaciones que impliquen una pérdida de viejas conquistas” (Garretón, 1982: 19). Es el momento donde se pone en juego la efectiva posibilidad de avanzar hacia cambios que realicen modificaciones sustantivas sobre el paradigma societal. Vale remarcar, en ese sentido, que hasta ese entonces el gobierno se había inclinado por un modo de avance del modelo que sus referentes políticos denominaron “gradualista”. Esto es: adaptar el *ritmo* de las transformaciones deseadas a las relaciones de fuerzas realmente existentes. Pues bien, lograda la revalidación electoral en octubre de 2017, llegaba la hora del “shock”. Ello repercutiría en el terreno de las resistencias sociales.

En este contexto se inician los primeros desplazamientos fuertes en el sindicalismo. Las pujas internas de la CGT se manifiestan en un iniciático gesto de fractura. El 29 de noviembre de 2017, las dos CTA, junto a la Corriente Federal de la CGT y el sindicato de

Camioneros de la misma central, convocan a una concentración frente al Congreso Nacional, en contra del paquete de reformas. Esto significa que el liderazgo hasta entonces oscilante del ex Secretario General de la CGT, Hugo Moyano, se sitúa más decididamente en el campo opositor, coordinando acciones con los sectores sindicales hasta entonces contundentemente enfrentados al gobierno.

Creemos que dicha movilización no resultó una acción secundaria. Si bien el sindicalismo cegetista en su conjunto ha tendido al centro del sistema político en un sentido conservador, el viraje radical del gobierno, junto con las relaciones de fuerzas aún indefinidas en el terreno de lo social (más allá de la reciente victoria electoral del oficialismo), provocaron un deslizamiento de un sector importante de la CGT hacia el frente opositor. La demostración de ese carácter aún indefinido en la lucha social, se expresaría de manera inmediata en dos elementos. En primer lugar, en el estancamiento de la reforma laboral integral pretendida por el gobierno (que involucraba modificaciones incluso en la Ley de Contrato de Trabajo). Pues por un lado, hasta los referentes más conservadores de la CGT se manifestaron en contra; mientras que en la calle se expresaron tanto los sindicatos más firmes de la oposición, junto con gremios de envergadura, tales como los Camioneros que lidera Pablo Moyano. Pero, en segundo lugar, la manifestación más palmaria de la persistencia de la disputa en el campo de lo social, pese a la contundencia del triunfo del gobierno en las urnas, se reflejó en las multitudinarias movilizaciones de los días 14 y 18 de diciembre de 2017 frente al Congreso de la Nación contra la reforma previsional. En ambas jornadas el gobierno respondería con ferocidad mediante el ejercicio de la represión. Tal es así, que el escenario de violencia policial desatado el día 14 obligó al oficialismo a suspender la sesión legislativa de esa jornada, marcando la inexistencia de un consenso social en torno al avance de la reforma, que se constataría esa misma noche con “cacerolazos” masivos recorriendo la Ciudad de Buenos Aires. En síntesis, pese a la aprobación parlamentaria del día 18 de diciembre, el gobierno había sufrido una derrota política: el triunfo electoral no significaba un aval del conjunto social al comienzo de la fase “fundacional”.

De cualquier forma, este proceso de contestación ante el despliegue de la fase fundacional no se agotaría en diciembre de 2017. Un nuevo capítulo sería escrito en los comienzos de 2018. El día 21 de febrero se llevaría a cabo una masiva concentración convocada, otra vez, por las dos CTA, los movimientos sociales, la Corriente Federal de la CGT y el sindicato de Camioneros. De esa manera, se afianzaba el proceso de articulación en el sindicalismo, con firmeza para expresar los reclamos en la calle y rechazar el programa estratégico del

gobierno. Tal reagrupamiento establece crecientes tensiones al interior del sindicalismo cegetista, en tanto agudiza la fractura con la mayor parte de sus dirigentes (quienes se caracterizan por su perfil conservador, por ser renuentes a la expresión callejera, y por su obstinación en el diálogo institucional). Se vislumbra entonces la división entre, por un lado, un sindicalismo que observa la necesidad de la disputa política frente a un proyecto estratégico de “refundación social”; y por el otro lado, un sector (mayoritario en la dirigencia de la CGT) que actúa ajustándose al rol sistémico de la institucionalidad sindical como “nexo” entre Estado y Sociedad (retracción corporativa), aún bajo el costo de ser el garante institucional del deterioro social de las mayorías.

Ahora bien, existe un parteaguas en el gobierno de Cambiemos, que podemos ubicar en el mes de mayo de 2018. Decíamos en la introducción de este artículo, que la dinámica de rearticulaciones en el movimiento popular no puede ser escindida de la *temporalidad* del proceso económico. No para subsumir en éste último a lo político, pero sí para establecer un vínculo de justas dimensiones entre ambas esferas. La crisis cambiaria que atraviesa el gobierno a fines de abril y comienzos de mayo (que lleva el precio del dólar en apenas una semana de 20 a 28 pesos) desnuda la debilidad del frente externo en el esquema macroeconómico del gobierno. De esa manera, ante las dificultades para controlar el precio del dólar tras la corrida cambiaria, el gobierno atraviesa una crisis política. En esa situación, el día 8 de mayo el presidente Macri anuncia al pueblo argentino el inicio de las tratativas para sellar un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI). Pero allí no terminarían los desórdenes económicos. En el mes de agosto se produce una nueva corrida cambiaria, que lleva el dólar hasta el límite de los cuarenta pesos (se trata así de una devaluación del orden del 100% con respecto al comienzo del año), obligando al gobierno a rever el acuerdo sellado en el mes de junio con el FMI. El nuevo valor del peso, como es de esperar, provoca una espiral inflacionaria, que acabaría llevando el índice de incremento de precios del año 2018 al borde del 50%.

Así, los resultados en materia económica en sus primeros tres años de gobierno dejan al desnudo el fracaso rotundo del programa de Cambiemos en la economía. Ya nadie duda de ello. Desde ya, queda vigente la disputa por la interpretación de ese fracaso, es decir, asignar los responsables y las causas que lo provocaron. Por supuesto, ambos aspectos no resultan residuales. Más bien, asumen un carácter fundamental en términos políticos e ideológicos. Pero lo que nos interesa señalar aquí es que los condicionamientos impuestos a partir de ese momento por el FMI otorgan una nueva *temporalidad* al proceso económico, obligando al gobierno a abandonar de forma definitiva las recetas

anteriormente denominadas “gradualistas”, para avanzar en su lugar con un programa mucho más desembozado de ajuste, de corte netamente ortodoxo. Un cambio en la *temporalidad* que impacta de lleno en la esfera política, en tanto acelera el desarrollo de las contradicciones sociales ya existentes.

Entonces, a esta fase signada por el descontrol económico, marcada por las corridas cambiarias y la endeblez ya *evidente* del frente externo, que obliga al gobierno a sellar con apuros un pacto con el FMI, la llamaremos, siguiendo a Garretón, “fase de administración de crisis recurrentes”. Tal como señalábamos más arriba, Garretón observa que en esta etapa se trata de “apagar incendios”, una vez que ha entrado en crisis y se ha agotado el proyecto de “refundación social”. Aquí, de nuevo, reaparece el fantasma de la fase inicial, es decir, de la etapa que hemos dominado “reactiva”. Pues, como indica Garretón sobre esta tercera fase: “Los temas ideológicos principales apuntan nuevamente, pero esta vez en forma más desordenada, a agitar los temores de una vuelta al pasado” (Garretón, 1982: 21). Ante el desvanecimiento de las fantasías de un futuro mejor, solo queda en pie la promesa de conjurar un pasado al que no se debe retornar. En fin, es en el marco de estas coordenadas generales que debemos ubicar la continuidad en el despliegue del proceso de reconfiguración del movimiento popular. Reiteremos una vez más: no se trata de una situación económica que *determina* el devenir del proceso político. Más bien, sobre la base de un considerable plafón de organización social ya constituido, los cambios económicos *habilitan* una escucha política mucho más amplia por parte de la sociedad, volviéndose ésta más permeable frente al discurso y la práctica de la oposición social y política. Esto significa que no existen garantías al despliegue del conflicto social y político, pero sí oportunidades notablemente más favorables en el objetivo de ampliación de su base de adhesión social, condicionando de ese modo la actitud de referentes, actores e instituciones políticas.

De esta manera, entonces, se profundiza la línea de articulación en el movimiento popular que se había constituido con la marcha del 21 de febrero de 2018. Esa articulación gremial pone en aprietos a la conducción oficial de la CGT, que debe emitir una respuesta política ante el deterioro de las condiciones de vida, agudizado por la pérdida de valor de los salarios reales tras la devaluación de la moneda (primero en mayo y luego en agosto). Ello tiene como resultado los paros generales de la CGT llevados a cabo el 25 de junio y el 25 de septiembre. Pero en vistas de la retracción corporativa (ya señalada más arriba) de la parte mayoritaria de los dirigentes de la central obrera, esas medidas de fuerza, aunque contundentes, no tienen continuidad y se restringen a contener la presión social de sus

bases y de un sector considerable de la sociedad que manifiesta un rechazo al modelo económico. Asimismo, en lo político también se produce una reacción ante la crisis del gobierno. En el mes de mayo las dos cámaras legislativas aprueban un proyecto de ley, con apoyo de los diversos sectores del peronismo, para colocar un freno a los aumentos de tarifas acordados por el gobierno con las empresas energéticas. Un proyecto que, pese a ser vetado de inmediato por el presidente, no implicaría una profundización de la articulación opositora para poner en jaque a la Casa Rosada, en un momento en que el oficialismo da notorias muestras de desconcierto político.

En ese panorama debemos subrayar dos movimientos producidos en el seno del sindicalismo que son propios de este contexto. En primer lugar, a comienzos de septiembre, frente a la retracción corporativa de la conducción oficial de la CGT, el espacio conformado para la movilización del 21 de febrero avanza en la constitución de un Frente Sindical conjunto (el Frente Sindical para el Modelo Nacional). Allí se agrupan como actores principales: la Corriente Federal de Trabajadores de la CGT (conducida por el gremio de bancarios), el poderoso sindicato de Camioneros que lidera Pablo Moyano y el sindicato SMATA (Sindicato de Mecánicos y Afines del Transporte Automotor, golpeado por los severos efectos de la crisis en la actividad automotriz). De ese modo, se constituye un sector crítico de la política desarrollada hasta entonces por la conducción de la CGT, que se articula al mismo tiempo con las dos vertientes de la CTA y los movimientos sociales. El clímax de este proceso articulador se produce el 20 de octubre de 2018, cuando todo este espacio sindical, acompañado por los movimientos sociales, realiza una multitudinaria misa frente a la Basílica de Luján (Provincia de Buenos Aires) en conjunto con un sector de la jerarquía de la Iglesia Católica, donde se denuncian con dureza las consecuencias del modelo económico. Se trata de una acción que encrespa al gobierno al mostrar una gran amplitud, y ante todo, la venia de la cúpula eclesiástica local (y, según indican las sospechas, también del Papa Francisco).

Pero hay un segundo movimiento en este proceso articulador. Tanto Hugo Moyano (referente de los Camioneros y ex Secretario General de la CGT) como Ricardo Pignanelli (líder de SMATA) se reúnen y tienden puentes de diálogo con CFK. O sea, que la agudización del conflicto social no solo provoca una fractura interna que se manifiesta en la constitución de un sector crítico de la central obrera. También esa fractura genera un acercamiento de dicho sector disidente a la personalidad de la oposición política que en el seno del peronismo se ha mostrado más firme en su rechazo ante el intento de restauración neoliberal en Argentina. Esto se contrapone con la actitud de la conducción

oficial de la CGT, la cual intenta hallar una figura del peronismo conservador que se convierta en canal de expresión de los intereses sindicales dentro de los cauces estrictos del sistema político.

Pues bien, llegamos así al año 2019, signado por las elecciones presidenciales, donde se dirime la continuidad del gobierno de Mauricio Macri. El escenario se define por la implementación inflexible de los condicionamientos impuestos por el FMI en materia económica, en vistas de poder recibir el salvataje financiero que significan los dólares ingresantes por el acuerdo con el organismo multilateral. Se trata de un clima de recesión, de alza permanente en las tarifas de los servicios y el transporte públicos, y de persistencia de elevados niveles de inflación (los pronósticos más favorables hablan de un 30% anual, aunque en los primeros meses del año ya se registran índices mensuales del orden del 3/4%). Ello configura un contexto de penurias económicas en medio del cual se desenvolverá el proceso electoral. Dejamos para el apartado final algunas breves consideraciones acerca del porvenir, específicamente de la articulación entre lo social y lo político.

125

IV. Palabras finales: ¿es posible una coyuntura de condensación de lo social y lo político?

Siguiendo nuevamente a Garretón, cuando éste se refiere a la fase de “administración de crisis recurrentes”, afirma lo siguiente: “La problemática de la oposición en esta fase es la unificación de todos los descontentos y resistencias en un movimiento que evite la mera transformación del régimen y lo empuje hacia una crisis terminal” (Garretón, 1982: 21). En nuestro presente, no se trata de un régimen como en el contexto de las dictaduras, sino de un gobierno. La diferencia, desde ya, es sensible, pero creemos que de cualquier manera la afirmación guarda notable actualidad. El problema reside en si existe la posibilidad (o no) de aglutinar las resistencias y los descontentos en una opción política alternativa, que no constituya un mero recambio gubernamental, sino una transformación en la política económica y en el paradigma societal.

Pero como hemos señalado más arriba, las resistencias y los descontentos no se cristalizan de manera transparente en una representación política. Existe allí una

tensión irreductible. El interrogante es nuevamente, entonces, si resulta posible (o no) la irrupción de una *coyuntura* en la cual se produzca una *condensación* de las resistencias y los descontentos en una opción política transformadora.

Creemos que ese horizonte es posible solo en determinadas condiciones. Según nuestro punto de vista, tal emergencia requiere la existencia previa de una *crisis*, entendida como una fuerte conmoción, no estrictamente en materia económica, sino también en términos de una incertidumbre sobre las expectativas de futuro en la sociedad. Tal crisis resultaría condición de posibilidad, bajo una perspectiva de acción política, para lograr dos objetivos: 1) desarticular definitivamente las expectativas sociales generadas por el proyecto neoliberal (aún aquellas que se expresan como promesas de punición y castigos), como consecuencia del agotamiento causado por la incertidumbre que dicho proyecto implica para las mayorías sociales; y 2) provocar una sensación “evidente” de descomposición del gobierno, que incline a la oposición en su conjunto (incluyendo a sectores de las fracciones más conservadoras) a actuar bajo la perspectiva de una crisis terminal.

126

Tal *crisis* hoy no resulta un hecho, ni tampoco una posibilidad inminente. Si bien se nos presentan incontestables sus causas estructurales (actualmente muy visibles a la luz de la delicada situación del frente externo), no sucede lo mismo con la *temporalidad* de su incubación, y menos aún con las formas políticas y sociales en que ella pueda acabar por manifestarse. Es que, como hemos dicho más arriba, tampoco es posible descartar la capacidad del gobierno para sostener la “administración” de la situación crítica por un tiempo prolongado, más aun considerando los apoyos que concita en los poderes fácticos (a nivel nacional e internacional).

Para cerrar estas páginas, ahora sí, quisiéramos realizar dos señalamientos finales. El primero de ellos remite al nivel de acumulación popular alcanzado en este proceso. Las diversas articulaciones en el terreno de “lo social”, con proyección de masas, han resultado sustantivas. Tal es así, que de forma posterior al triunfo electoral de Cambiemos en octubre de 2017, cuando todo parecía encaminado a una sencilla reelección de Mauricio Macri en 2019, fue la movilización callejera contra las reformas aquel obstáculo que puso en cuestión el avance de la

“refundación social”, en un contexto que parecía brindar plena legitimidad política al proyecto del oficialismo de un “reformismo permanente”. Las resistencias y las expresiones de descontento, canalizadas a través de las mediaciones organizativas del pueblo y de las articulaciones producidas por ellas, resultan un activo de crucial importancia, aun bajo la hipótesis de la continuidad del proyecto neoliberal.

La contracara de ese activo se halla en la transformación de las relaciones de fuerzas cosechada por los avances del proyecto neoliberal y los espacios de poder conquistados por los poderes fácticos en esta etapa. En ese sentido, tal como ha señalado Garretón, es necesario reconocer que “estos regímenes dejan una profunda huella en sociedades que se transformaron y que, en parte, dejaron de ser lo que eran” (Garretón, 1982: 28).

Si bien tal apreciación fue realizada, y aún es válida en nuestro presente, a propósito de las tendencias regresivas provocadas por la embestida neoliberal, creemos que es posible pensar el reverso de ese retroceso. Es decir, consideramos que el cúmulo de resistencias y articulaciones propias de este momento crítico que viven las mayorías sociales en Argentina, puede resultar el laboratorio de experiencias que nos permita obtener a partir de ellas un conjunto de lecciones políticas, con el objetivo de que el próximo ciclo de avances populares recoja los aciertos del pasado, supere los errores cometidos, y adquiera una mayor profundidad. Es decir, siguiendo las palabras de Grüner con las que comenzamos este artículo, que las experiencias propias de las encrucijadas del presente nos permitan retroceder al pasado, no para chocarnos contra los límites de éste último, sino para poder dar un salto hacia el futuro.

127

¿Cómo se cita este artículo?

TZEIMAN, A. (2019). Reflexiones sobre la reconfiguración del movimiento popular argentino ante el proceso de restauración del proyecto neoliberal. *Argumentos: revista de crítica social*, 21, 102-128. Recuperado de: [link]

Bibliografía

Cortés, M. (2016). Argentina en la encrucijada: imágenes de la convulsión. *Memoria*, 257, 28-33.

Garretón M., M. A. (1982). *Proyecto, trayectoria y fracaso de las dictaduras militares del Cono Sur: un balance* (Documento de Trabajo N°217). Santiago de Chile: FLACSO.

Gramsci, A. (2007). *Escritos políticos (1917-1933)*. Buenos Aires: Siglo XXI.

Grüner, E. (2003). Del experimento al laboratorio, y regreso. Argentina, o el conflicto de las representaciones. *Sociedad*, 20/21, 27-54.

O'Donnell, G. (2000). Las Fuerzas Armadas y el estado autoritario del Cono Sur de América Latina. En N. Lechner (comp.), *Estado y política en América Latina* (pp. 199-235). México: Siglo XXI.

Portantiero, J. C. (1973). Clases dominantes y crisis política en la Argentina actual. En O. Braun (Comp.), *El capitalismo argentino en crisis* (pp. 73-117). Buenos Aires: Siglo XXI.

Portantiero, J. C. (1982). Gramsci y el análisis de coyuntura (algunas notas). En *Los usos de Gramsci* (pp. 177-193). México: Folios Ediciones.

Poulantzas, N. (1974). *Poder político y clases sociales en el Estado capitalista*. México: Siglo XXI.

Tzeiman, A. (2017). *Radiografía política del macrismo. La derecha argentina: entre la nación excluyente y el desafío democrático*. Buenos Aires: Caterva.

Zavaleta Mercado, R. (1990). El Estado en América Latina. En *El Estado en América Latina* (pp. 161-203). La Paz: Los Amigos del Libro.

Zavaleta Mercado, R. (2008). *Lo nacional-popular en Bolivia*. La Paz: Plural.